

# **LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS EN AMÉRICA LATINA: EL CASO ARGENTINO**



Tutora: Pilar Folguera Crespo

Alumna: Ana Moreno Fernández

11917 palabras

Sin mención

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
1.1. Presentación	
1.2. Metodología	
1.3. Definiciones y conceptos	
<b>2. CONTEXTUALIZACIÓN</b>	<b>11</b>
2.1. Contexto legislativo	11
2.1.1 Latinoamérica	11
2.1.2 Argentina	14
2.2. Contexto sociopolítico en Argentina	21
<b>3. ANÁLISIS DEL PROCESO</b>	
3.1. Proceso político	25
3.2. Proceso social	28
<b>4. CONCLUSIONES</b>	<b>36</b>
<b>5. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES</b>	<b>38</b>
5.1. Monografías y artículos	
5.2. Fuentes e informes de Internet	
5.3. Prensa	
<b>6. ANEXOS</b>	<b>48</b>

## PALABRAS CLAVE

Derechos sexuales y reproductivos. Género. Feminismo. Argentina. Latinoamérica. Aborto. IVE. ILE. Legislación del aborto. Congreso y Senado de Argentina.

## RESUMEN

Una de las mayores amenazas contra los derechos sexuales y reproductivos en América Latina en general y en Argentina en particular, son las restrictivas legislaciones para el acceso a la interrupción del embarazo. En este trabajo se analiza el intento de 2018 para modificar esa legislación en Argentina, exponiendo el proceso social y político que acompañaron a la presentación y votación de un Proyecto de Ley que trataba de modificar esta situación y que causó una profunda división en el país entre los que consideran que el acceso al aborto es un derecho y los que lo califican de atentado contra la vida humana. El proceso y sus argumentos principales, a favor y en contra, se siguen a través de la documentación que ofrecen las cámaras legislativas argentinas.

## ABSTRACT

One of the biggest threats against sexual and reproductive rights in Latin America generally and in Argentina particularly, are the restrictive legislation regarding the access to the termination of the pregnancy. In this work it is analysed the attempt of 2018 to modify that legislation in Argentina, presenting the social and political process that accompanied the presentation and voting of a proposed bill that intended to modify this situation and that caused a deep division in the country between the ones that consider that the access to abortion is a right and those who designate it as an assault against human life. The process and principal arguments (in favour and against) are followed through the documentation offered by the Argentinian legislative chambers.

## 1.INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

### 1.1. Presentación: LA PERCHA



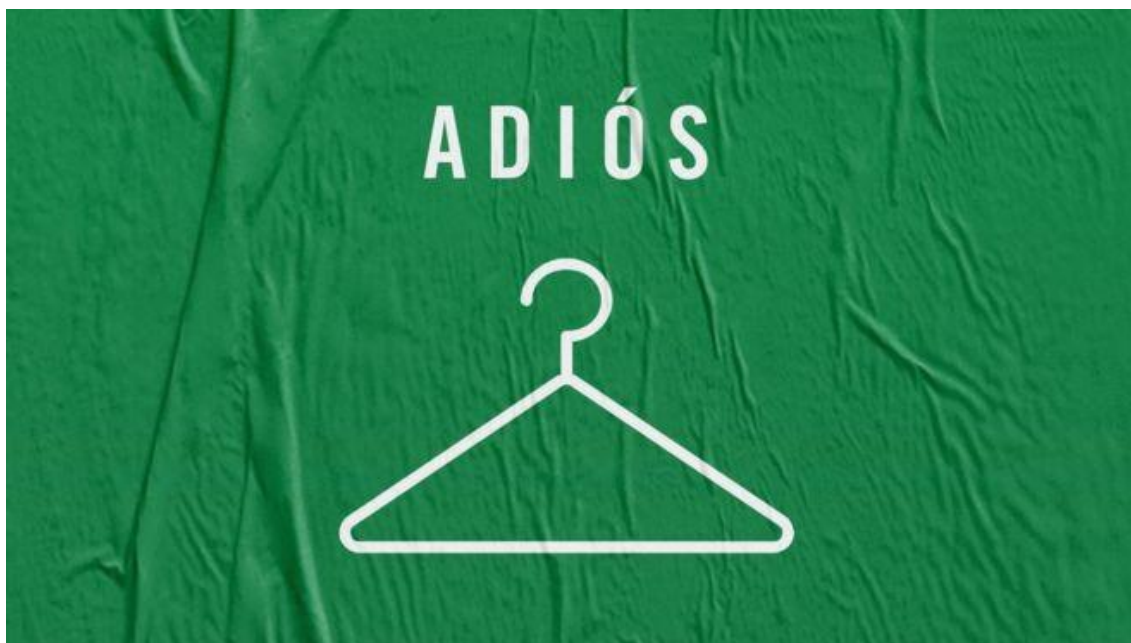
(Camila [cherryssandewine], 2018)

A pocas horas de que el Senado de la República Argentina rechazara por un escaso margen el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el *hashtag* YoAborte reunió en Twitter decenas y decenas de tremendos testimonios retratando la realidad del aborto clandestino en el país. Son horrendos relatos de hemorragias, infecciones, sucios jergones escondidos en chabolas, septicemias, fallos orgánicos, tremendos dolores o experiencias cercanas a la muerte. Por aquellos días, Elisa Estenssoro, jefa del servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de la Plata, explicaba en la prensa el día a día de su trabajo en cuidados intensivos al recibir a mujeres víctimas de abortos clandestinos mal practicados:

“Las que sobreviven pueden sufrir todo tipo de consecuencias, y una bastante común ante las infecciones es la extracción uterina. Entre las más graves, sin embargo, está la coagulación intravascular diseminada. Significa que se van trombosando todos los pequeños vasos y hay que ir amputando las extremidades: pies, piernas, brazos, es una cosa terrible”. (Benavides, 2019)

Con la movilización de las organizaciones favorables a la legalización del aborto en Argentina, han comenzado a aflorar los relatos tantos años silenciados. A pesar de las prohibiciones, los abortos se siguen practicando, solo que en condiciones deplorables. Aunque las clases acomodadas puedan solventar esta situación de forma ilegal pero segura, en clínicas privadas y con supervisión médica, las clases más desfavorecidas, por falta de “plata”, de formación y de información, se arriesgan en prácticas que,

demasiado a menudo, les cuestan la vida. Perejil, brebajes de todo tipo, sondas e instrumentos... Pero entre los inconcebibles objetos para practicar estos abortos clandestinos, uno especialmente terrible fue el elegido como símbolo por los movimientos en pro de la legalización: la percha.



Sin perder de vista la trágica realidad argentina, como la de otros países en los que la regulación del aborto solo es materia de código penal, en este trabajo se aborda desapasionadamente el caso de este país como un ejemplo de la situación de los derechos reproductivos en la región; la evolución legislativa hasta el presente y todo el contexto político y social que ha rodeado el debate surgido en torno a la cuestión y los principales argumentos de las partes enfrentadas.

Se trata de un análisis global para proporcionar un marco de comprensión integral de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina.

## **1.2. Metodología**

La metodología de esta investigación ha sido fundamentalmente cualitativa, recurriendo a las fuentes primarias y secundarias, para una aproximación global y compleja al fenómeno; puntualmente hemos recurrido a la investigación cuantitativa basada en estadísticas para contrastar o ampliar el análisis. La perspectiva teórica empleada ha sido el análisis de textos académicos y divulgativos.

El enfoque global ha necesitado del filtrado de gran cúmulo de información de las diversas fuentes consultadas: legislativas, documentos de organismos internacionales, literatura académica, documentación del Senado, prensa, redes sociales, etc. Esta documentación ha sido trabajada con un prisma inductivo con el fin de reconocer patrones, clarificar posturas políticas y sociales, y generar conclusiones.

En este trabajo ha sido clave el análisis desde la perspectiva de género de la fuente primaria de los debates en el Parlamento y Senado de Argentina, a través del portal <https://www.congreso.gob.ar/> que da acceso a los videos de las sesiones plenarias, las comisiones o la transcripción taquigráfica de los debates. Las búsquedas a través de las ediciones digitales han sido fundamentales para analizar los medios de comunicación. Este estudio nos ha permitido desentrañar cómo se configuraron las posturas ideológicas y doctrinales y documentar los movimientos sociales y sus actores o la repercusión del debate a nivel internacional. La exploración de las redes sociales y en especial de Twitter, ha reforzado los análisis de las distintas posturas y nos ha acercado aún más a la multitud de discursos de la sociedad civil.

### 1.3. Definiciones y conceptos

#### DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

La Organización Mundial de la Salud reconoce que los derechos sexuales abarcan “derechos humanos reconocidos por leyes nacionales, documentos internacionales y otros acuerdos de consenso que incluyen el derecho de todas las personas, libres de coerción, discriminación y violencia a un mayor estándar de salud, en relación a la sexualidad, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva”.

(Organización Mundial de la Salud, 2017) No es solo cuestión de librarse de la enfermedad, sino de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda lograr.

En 1997, el Congreso Mundial de Sexología de Valencia proclamó una completa **declaración de los derechos sexuales** a los que identificó como derechos humanos universales, por basarse en la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. También los definió como derechos humanos básicos, al derivarse de un derecho fundamental como el derecho a la salud. Siguiendo esta declaración, la salud sexual solo se alcanza cuando el entorno reconoce, respeta y ejerce esos derechos sexuales, de ahí el llamamiento a que la sociedad, con todos sus medios, reconozca, promueva, respete y defienda una amplia tabla de derechos (Asociación Mundial para la Salud Sexual, 1997).

Sin embargo, el estado actual de respeto a los derechos sexuales y reproductivos está demasiado lejos del estado de máximos que refleja la declaración. En gran parte, se debe a procesos específicos de cada entorno nacional, pero también obedece a procesos globales (Agencia EFE, 2018)

Por eso es importante que el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos sea en clave de Derechos Humanos. Avanzar en estos derechos –y conseguir que la mujer los disfrute- tiene que ver con la cultura sexual y reproductiva, pero también con la posibilidad de acceder a derechos civiles, económicos y culturales plenos.

Julieta E. Cano (2016) explica que la dicotomía público/privado es la que ha hecho que temas como el aborto hayan quedado en un segundo plano o se haya postergado su legislación a pesar del ánimo social. El hecho de que las mujeres tengan una ciudadanía incompleta al no tener autonomía con sus propios cuerpos tiene su origen en una concepción en la que los asuntos de los cuerpos de las mujeres no solo son ignorados,

por pertenecer de una manera natural al ámbito privado, sino que también el sector conservador los legisla de manera paternalista.

Un ejemplo de ello es el caso de los cuidados (Barrancos, D. 2011, Pautassi, L.C., 2011, 2016) y su invisibilidad en el mercado de trabajo, una cuestión tradicionalmente olvidada con la excusa de que pertenece a un ámbito doméstico, privado y, por supuesto femenino. (Barrancos, 2011)

En el análisis de nuestro caso, hemos visto como la realidad ha superado leyes vigentes pero obsoletas que no ofrecen soluciones a las demandas ciudadanas. De ahí la presión y el debate generado para hacer visibles los problemas y cambiar la situación. Al considerar como derechos humanos los derechos sexuales, aparece la contradicción: los primeros son universales, pero entran en conflicto con un entorno que no reconoce los segundos. Es lo que algunas autoras señalan, que la ciudadanía tiene género. (Cruz e Yannoulas, 2011)

## **FECUNDACIÓN Y CONDICIÓN HUMANA**

Es uno de los argumentos recurrentes en los debates en torno al aborto; las instancias autodenominadas “provida” insisten en que el momento de la fecundación es el que señala la existencia de vida humana. A partir de este dictamen, construyen su argumentación en contra del aborto, en cuanto que significa acabar con una vida humana. En los momentos previos a la aprobación en España de la ley de plazos, un grupo de científicos afirmaba que “Existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación. Los conocimientos más actuales así lo demuestran” (“Declaración de Madrid en favor de la vida humana naciente”, 2009)

Claro que poco después, surgió otro manifiesto, también suscrito por científicos, desmintiendo estas afirmaciones: “El momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos; el conocimiento científico puede clarificar características funcionales determinadas, pero no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano” (“En contra de la utilización ideológica de los hechos científicos”, 2009)



## ABORTO

El aborto es la interrupción del embarazo, espontánea o inducida, dependiendo de si el desarrollo del feto se detiene de forma natural o no. Los abortos pueden inducirse por diferentes métodos seguros, para lo que se debe contar con información, contención y seguimiento por parte de personal médico. Existe el **aborto farmacológico o químico**, en el que se utilizan medicamentos como el misoprostol y también el **quirúrgico**, practicado por profesionales que utilizan diversas técnicas. El **aborto clandestino** es el que se practica sin intervención médica especializada y a menudo en ubicaciones y entornos carentes de unas mínimas condiciones sanitarias. Los métodos empleados por personal sin cualificación son rudimentarios y carentes de base científica. Además del daño psicológico, supone un gravísimo riesgo para la salud de las mujeres, que pueden sufrir hemorragias, infecciones graves, complicaciones o incluso la muerte.

El **aborto terapéutico** es el que se practica para interrumpir el embarazo cuando la salud o la vida de la persona gestante están en riesgo. A menudo, su tratamiento legislativo está despenalizado, aunque muchos profesionales médicos se amparan en la objeción de conciencia para negarse a practicarlo.

## IVE/ILE

Las siglas ILE corresponden a Interrupción **Legal** del Embarazo. Están por tanto referenciadas a los supuestos legales bajo los que están permitidos los abortos.

Por el contrario, IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, hace referencia a ley de plazos. El aborto depende de la voluntad de la persona gestante.

## LEY DE PLAZOS Y LEY DE SUPUESTOS

Son las principales formas de tratamiento legislativo de la interrupción del embarazo. Las **leyes de plazos**, mucho más abiertas, permiten el aborto a demanda de la madre sin más limitación que la temporal, que suele ser de 14 semanas, el periodo con menos riesgos médicos. El plazo se amplía para casos especiales de malformaciones en el feto o riesgos para la vida de la madre. También suelen fijar la edad mínima en la que se

puede solicitar el aborto, por debajo de la cual se exige la autorización de los progenitores o tutores legales.

Las **leyes de supuestos** parten de una situación en la que la práctica del aborto es punible, pero se despenaliza en casos concretos. El riesgo para la salud o la vida de la madre es el más frecuente, pero dependiendo de los países, hay otras circunstancias despenalizadas: que el embarazo sea causado por una violación, incesto o incluso causas socioeconómicas.

La existencia de una legislación que contemple determinados supuestos no siempre es garantía de que las mujeres en esas circunstancias puedan abortar legalmente. (Amnistía Internacional, 2017, p.21)

## 2. CONTEXTUALIZACIÓN

### 2.1. Contexto legislativo

#### 2.1.1. Latinoamérica

En general, la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo en toda Latinoamérica y el Caribe es bastante restrictiva<sup>1</sup>. Tan sólo Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico, Uruguay y Cuba tienen una ley de plazos que permite abortar sin restricciones durante las primeras semanas de gestación, con autorización de los padres en los casos de menores en los dos últimos países. En México la legislación sobre el aborto depende de cada estado, pero tan sólo en Ciudad de México existe ley de plazos, con aborto permitido hasta las doce semanas. En el otro extremo, Surinam, Haití, Nicaragua, Honduras y El Salvador mantienen una prohibición total del aborto, sin excepciones. En el resto hay vigentes leyes de supuestos, de las que Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Venezuela, son las más restrictivas, puesto que solo despenalizan el aborto en caso de peligro para la vida de la embarazada. Otros países incluyen supuestos como la inviabilidad del feto, el incesto o factores socioeconómicos<sup>2</sup>.

**Chile** entró en la lista de países que prohíben por completo el aborto en 1989, con una ley de la dictadura de Pinochet. En 2017, tras el pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional al que había apelado la oposición, se promulgó una ley de supuestos que lo despenaliza en caso de peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. (BBC, 2017)

En **Colombia** fue una sentencia de la Corte Constitucional sobre un caso concreto, la que abrió la puerta a la despenalización en caso de riesgo para la vida o salud de la mujer, violación, incesto o malformación del feto. (Center for Reproductive Rights)

---

<sup>1</sup> En este apartado se han utilizado numerosas fuentes periodísticas. Aunque se irán citando aspectos concretos, con carácter general: BBC, 2017, 21 de agosto; 2018, 9 agosto.

<sup>2</sup> El Center for Reproductive Rights, en <https://reproductiverights.org/worldabortionlaws> mantiene un mapa actualizado con la situación legislativa de cada país del mundo.

**Brasil** mantiene en vigor la regulación del código penal de 1940 que lo prohíbe con las excepciones de violación o peligro para la vida de la gestante. (Ibidem)

En **Perú**, también regulado en el código penal, (La República, 2017) solo se contempla el supuesto de peligro para la vida y salud de la mujer. Estos abortos terapéuticos ya se permitían en el texto legal de 1924, pero no fue hasta 2014 cuando se aprobó una Guía Técnica para la atención en estos casos que, en la práctica, amplía los supuestos al considerar por ejemplo que en caso de violación se puede poner en riesgo la salud mental o social de la mujer. La publicación de esta guía se produjo después de dos condenas del Comité de Derechos Humanos de la ONU por sendos casos en los que se negó el acceso al aborto a adolescentes.

Después de varios intentos, **Uruguay** aprobó en 2012 su ley de plazos: hasta las 12 semanas y hasta las 14 si el embarazo es producto de una violación. No hay límite de tiempo en caso de riesgo para la vida de la mujer o en el de un feto con malformaciones. El problema es que esta ley exige hasta tres consultas previas y un periodo de reflexión de cinco días. En algunos casos, la falta de personal o la poca predisposición de los servicios médicos, retrasan las consultas y alarga los plazos para las mujeres que quieren abortar. Por eso, la periodista Mariana Carbajal (2018 a) señala que, en la práctica, la exigencia de estos requisitos dificulta el acceso al aborto legal a las uruguayas.

La misma autora (Carbajal, 2018 b) resume otras barreras como la desinformación y el desconocimiento de la ley entre la población, además del porcentaje de objeciones de conciencia entre los ginecólogos: más de un tercio se niegan a realizar abortos y su desigual distribución dificulta el acceso a esta práctica en los departamentos que concentran más objetores.

A pesar de todo, las consecuencias de la ley son evidentes. Desde su aprobación, no se han registrado muertes en el sistema público de salud, aunque entre 2013 y 2016 se han contabilizado tres fallecimientos en prácticas clandestinas que persisten por los problemas mencionados. Además, en Uruguay ha desaparecido el estigma social que acompañaba al aborto. (Martínez, M., 2018)

Al margen de la legislación particular de cada país sobre el aborto, hay textos jurídicos internacionales que abordan los derechos sexuales y reproductivos. El más importante de ellos es la **Convención sobre la eliminación de todas las formas de**

**discriminación contra la mujer**, (CEDAW, 2016) habitualmente conocido por sus siglas en inglés, CEDAW. Es un texto de 30 artículos, que se reproduce en los Anexos, con rango de tratado internacional de las Naciones Unidas que se firmó en 1979 y que sirvió como punto de partida para muchas de las luchas contra la discriminación. El CEDAW define la discriminación y apunta las acciones necesarias para acabar con ella.

Los estados firmantes se comprometen a modificar su legislación para acabar con cualquier forma de discriminación. Incluye, además la primera ratificación de los derechos reproductivos de las mujeres.

El tratado establece un mecanismo para que los estados firmantes elaboren periódicamente informes sobre el cumplimiento que son posteriormente analizados para redactar recomendaciones a los países en concreto. En 2016 emitió una de esas cartas de recomendaciones sobre diferentes aspectos de la situación de la mujer en Argentina, instando a mejorar el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, reducir la mortalidad materna, extender a todo el país las medidas del protocolo del Ministerio de Salud para la atención en los casos de interrupción legal del embarazo (ver más abajo el apartado dedicado a la legislación en Argentina) y garantizar el acceso a abortos seguros en los casos despenalizados, controlando, por ejemplo, las justificaciones de los profesionales para la objeción de conciencia. Además, anima a legislar la ampliación de los supuestos para la interrupción del embarazo. (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer FEIM, 2016).

En 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas convocó una primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. De este encuentro nació el llamado **Consenso de Montevideo** (CEPAL, 2013) que significó un hito para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos. El texto está firmado por 38 países que se comprometían a revisar sus leyes que pudieran menoscabar el acceso de la población a la salud sexual y reproductiva, a acabar con las desigualdades territoriales y a procurar un acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. En el texto se condena la violencia de género y la mortalidad materna como violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

### 2.1.2. Argentina

<b>LEGISLACIÓN DEL ABORTO EN ARGENTINA</b>		
1886	Primer Código Penal	Delito en todos los casos
1921	Reforma del Código	El artículo 86 despenaliza dos supuestos: peligro para la vida o salud de la madre no evitable o embarazos por una violación o por atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente
1968	Decreto Ley 17.567	El peligro para la vida o la salud de la embarazada tiene que ser grave. La violación tiene que haber sido denunciada
1973	Ley 20.509	Deroga leyes de la dictadura. Vuelta al texto de 1921
1976	Decreto Ley 21.338	Recupera modificaciones de 1968
1984	Ley 23.077	Deroga leyes de la dictadura. Vuelta al texto de 1921
2007 2019	Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo	Presentada en 8 ocasiones. En 2018 llegó a aprobarla el Congreso, pero no el Senado
2012	Sentencia FAL	Interpreta el artículo 86. Despenaliza el aborto en todos los casos de violación; aclara que no es necesario permiso judicial; insta al Ejecutivo a que se establezcan protocolos de atención y asistencia a las mujeres
Desde 2012	Consejerías pre y post aborto	Coordinación de profesionales médicos en la atención a las mujeres que desean abortar
2015	Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo	Interpreta la causa de no punibilidad por peligro para la salud o la vida de la madre con la definición de salud de la OMS: no es ausencia de enfermedad, sino bienestar físico, mental y social completo.

Fuente: elaboración propia

Desde el punto de vista legislativo, el aborto en Argentina ha estado siempre regulado, o más bien censurado, puesto que a esta práctica se la define como delito, por el Código Penal. El primer texto, de 1886, lo consideraba delito en todos los casos. En la reforma de 1921 se dio paso a la autorización de dos supuestos; el aborto dejaba de ser punible en caso de peligro para la vida o la salud de la madre o de violación o atentado al pudor sobre una mujer “idiotas o demente” (sic) como reza el articulado recogido en el anexo.

A partir de ahí, varios decretos cruzados significaron avances y retrocesos en el listado de los supuestos. (Bergallo y Ramón, 2019) Así, en 1968 se decretó la no punibilidad del aborto en caso de grave riesgo para la salud o la vida de la madre, en todos los casos de violación denunciados y añadió la necesidad de autorización de un representante legal en caso de menores y de –otra vez- *mujer idiota o demente*. Hasta en dos ocasiones, 1973 y 1984, las leyes que dejaban sin efecto las reformas penales de las dictaduras inmediatamente anteriores supusieron la vuelta a la redacción del código de 1921, con su artículo 86 que se mantiene hasta la actualidad.

Desde 2007 se intenta abrir paso una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que reiteradamente ha iniciado su tramitación. Tan sólo una vez ha conseguido pasar a discusión en las cámaras, en 2018 y, tras aprobarse en la Cámara de Diputados, fue rechazada en el Senado. En mayo de 2019, se ha presentado de nuevo el proyecto legislativo.

A lo largo del tiempo, la redacción del artículo 86 ha sido motivo de dudas sobre el verdadero alcance de los supuestos despenalizados; se han generado tensiones entre los que realizan una lectura restrictiva intentando obstaculizar el acceso al aborto, incluso en los casos despenalizados por el código y los que defienden lo contrario.

Lógicamente, estas tensiones además de su amplio eco en los medios de comunicación se han dirimido en los tribunales de justicia por la consideración de delito que en Argentina tiene la interrupción voluntaria del embarazo y por la judicialización de las peticiones de aborto.

En la abundante literatura son numerosos los casos citados y analizados como ejemplo de estas resistencias de médicos, jueces o burócratas a permitir el acceso al aborto aún en los casos contemplados por el artículo 86, aunque desde comienzos de este siglo, la actividad de las organizaciones y abogadas feministas se intensificó contra estas prácticas obstaculizadoras (Tarducci, 2018 p.430, 431) Destacamos, como ejemplo el

análisis del proceso TS de 2000 (Monte, 2018) en el que los médicos negaron la práctica del aborto a un feto diagnosticado de anencefalia, una gravísima malformación cerebral.

En 2009, Hoop narra dramáticos casos en los que las decisiones médicas o judiciales contradicen abiertamente la vetusta redacción del artículo 86 como claro ejemplo de la resistencia a practicar incluso los abortos no punibles:

“Ana María Acevedo, (...) no recibió tratamiento alguno para el cáncer que padecía porque estaba embarazada y por ser el tratamiento necesario incompatible con la gestación. Ana María, pobre y de 20 años, no recibió información sobre su derecho a abortar y recibir los tratamientos disponibles para tratar su enfermedad. El cáncer avanzó a la par que la gestación mientras ella no recibía tratamiento y solamente le aplicaban analgésicos que no dañaran al feto. Los padres de Ana María solicitaron a los médicos el aborto, pero ellos eludieron su responsabilidad, convocaron a un comité de bioética y, finalmente, se negaron a realizar el aborto por convicciones religiosas. A las 22 semanas de embarazo el cuerpo de Ana María ya no resistía y le hicieron una cesárea, la niña que nació, murió 24 horas después de la operación y Ana María falleció un mes después, ello motivó una investigación penal” (Hoop, 2009, p.104)

O también:

“... una jueza de Entre Ríos (...) decretó una medida cautelar para suspender la interrupción del embarazo de una adolescente con discapacidad mental, decisión que luego fue revocada por el tribunal que revisó la causa”. ( Bergallo y Ramón, 2009)

Pero sin duda, el caso más célebre y con más consecuencias efectivas fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el conocido como caso FAL. En este caso, la madre (FAL son las iniciales de su nombre y apellidos) de una niña de 15 años violada por su padrastro solicitó el aborto y los médicos se lo denegaron. Dos instancias judiciales respaldaron la decisión médica (el tribunal penal se declaró incompetente y el civil lo denegó). Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut, donde sucedieron los hechos, permitió la realización del aborto. Aun así, un funcionario de justicia apeló esta decisión que de esta manera llegó hasta la Corte Suprema. Dos años después, el alto tribunal, a pesar de que el asunto estaba resuelto, el aborto se había practicado, decidió entrar en el fondo de la cuestión al considerar que en Argentina se



imponían barreras arbitrarias para el ejercicio de un derecho por las mujeres, dictando una sentencia para “evitar futuras frustraciones de derechos” (Tarricone, 2018)

La Corte Suprema decidió<sup>3</sup> fijar la interpretación del literal del artículo 86. 2º, despenalizando el aborto en todos los casos de violación, con independencia del estado de salud mental de la mujer. Como argumentos, la Corte esgrimió que el Código Penal no se podía interpretar de forma restrictiva por las normas internacionales de tratados suscritos por Argentina; también el principio de igualdad de la ley y no discriminación que impide tratamientos distintos para víctimas de un mismo delito; el principio de inviolabilidad de la persona que no permite exigir conductas heroicas como obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación.

Además, reconocía el derecho al aborto que tienen las mujeres en los supuestos contemplados por la ley penal, interpretando que era algo que no iba contra la Constitución ni contra las Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Y, en contra de lo que muchas instancias médicas venían exigiendo, el tribunal aclaraba que la práctica de un aborto no punible no necesitaba de autorización judicial previa.

El fallo también realizaba un importante llamamiento al ejecutivo para que en los centros sanitarios se articularan protocolos para la atención en caso de abortos legales y permitía la objeción de conciencia del personal médico, pero solo en el momento de fijar esos protocolos o al iniciar su servicio en un centro sanitario. (Programa de Salud Sexual y Reproductiva, 2017 p.10)

Esta sentencia era un serio intento de acabar con la inseguridad jurídica de la situación del aborto en Argentina en la que muchas instancias obstaculizaban o judicializaban los casos, solicitando autorización de los tribunales para los abortos no punibles. Y, para colmo, esos tribunales tomaban decisiones muy distintas: desde declararse no competentes porque el artículo 86 no contempla la intervención judicial, a los que denegaban la autorización, mientras que otros sí intervenían, autorizando la práctica del aborto (Ibidem, p.1). En este sentido, la propia Corte Suprema declaraba la pertinencia de estas aclaraciones para no comprometer al Estado, como había sucedido por ejemplo en el “caso LMR” en el que tres instancias judiciales denegaron el permiso para

---

<sup>3</sup> Un completo análisis de la sentencia puede seguirse en una nota técnica de la Dirección Provincial de Salud de la Mujer de la provincia de Buenos Aires (Programa de Salud Sexual y Reproductiva, 2017)

practicar el aborto a una discapacitada mental víctima de violencia sexual en el ámbito familiar. Cuando la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires aprobó la solicitud, los médicos se negaron por lo avanzado de la gestación. Finalmente, el embarazo se interrumpió en una clínica privada y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que en este caso se habían infligido a la víctima tratos crueles, inhumanos y degradantes, violando su derecho a la tutela judicial efectiva. (Hopp, 2009 p.105)

A pesar de la claridad del tribunal en el fallo FAL, los obstáculos para el acceso a este derecho no se consiguieron remover rápidamente en Argentina. Gebruers y Gherardi (2015) repasan de forma pormenorizada los casos de judicialización indebida de casos de aborto permitidos por la ley incluso después de la sentencia FAL. En el periodo 2012 al 2014, se analizan casi 30 resoluciones judiciales. A través de este estudio, identifica a los impulsores de prácticas de obstrucción, las motivaciones o los argumentos desarrollados. El análisis detecta un avance en lo referente al poder judicial, pero revela las resistencias y tensiones por la intervención de actores diversos (además de jueces, fiscales o abogados, profesionales sanitarios, instituciones de salud, activistas particulares, políticos y partidos –Partido Demócrata Cristiano- y organizaciones como Portal de Belén, Profamilia y Agrupación Católica) que trata de frenar el acceso al aborto legal en Argentina. En cuanto a los argumentos empleados para esta resistencia, el artículo destaca que las apelaciones dogmáticas son cada vez menores a medida que se asciende de instancia judicial y que los tribunales superiores eran ya los más proclives a seguir con fidelidad las interpretaciones y directrices de la Corte Suprema en el reiterado caso FAL.

Otro trabajo ya mencionado (Hopp, 2009) se encarga por su parte de contemplar otro aspecto de las consecuencias del fallo FAL: su repercusión en las diferentes provincias argentinas. Como se ha señalado, el tribunal instó al Ejecutivo y en concreto a los gobiernos regionales, para que pusieran en marcha protocolos para la atención de la mujer en caso de aborto legal. El artículo, con el análisis de más de 120 noticias, constata como fueron muy numerosas las resistencias, no ya para la puesta en marcha de esta atención demandada por la Corte, sino en contra mismo del ejercicio del derecho, desde exigir la intervención de un Comité interdisciplinar, a jueces que suspenden la aplicación de los protocolos o responsables de salud y gobernadores de las provincias

que declaran abiertamente que no acatan el fallo FAL por referirse según ellos a un caso puntual y que no es de aplicación en casos similares.

A pesar de todas esas resistencias, la sentencia FAL ha conseguido impulsar el acceso al aborto legal en Argentina en especial en los últimos años. Un análisis detallado (Fernández, 2018) de lo sucedido en el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta 2017, destaca con dos hitos importantes, la puesta en marcha de las consejerías pre y post aborto y la publicación, en 2015 por parte del Ministerio de la Salud del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.

En cuanto a las consejerías, nacieron para coordinar a los profesionales implicados en la atención a mujeres que solicitaban el acceso al aborto. Desde el primer momento adoptaron el enfoque de que estaban ante un problema de salud y no de una cuestión moral; reconocieron que las mujeres eran sujetos de derecho a las que había que tratar con respeto y dignidad y aceptaron que los abortos se seguirían practicando, con independencia de su persecución, aunque eso sí, en condiciones de mucho más peligro para la mujer. Por eso su labor se centró en brindar información sobre cómo realizar un aborto con medicamentos para evitar riesgos para la persona que ha decidido abortar. (Fernandez, S., 2017, p.91)

En 2015 el mencionado Protocolo viene a recoger la interpretación que muchos equipos médicos de las consejerías realizaban ya de la primera causa de no punibilidad del aborto del Código Penal, el del riesgo para la salud o la vida de la gestante. Y lo hace a la luz de la definición de la salud de la OMS desde 1948, que no se refiere solo a la ausencia de enfermedad, sino también al bienestar físico, mental y social completo. De esta forma, el Protocolo fija como causas para acceder al aborto, las dimensiones mentales y sociales, no considera necesario que exista una patología para considerar que existe riesgo y deja en manos de las mujeres decidir los riesgos que están dispuestas a asumir. Gracias a eso, los profesionales de la salud que trabajaban en este campo comenzaron a realizar interrupciones legales del embarazo con estas causas ampliadas respecto a la tradicional interpretación del artículo 86.

El artículo de S. Fernández Vázquez (2018) constata, a través de entrevistas con los profesionales de la salud como ha contribuido el Protocolo –recordemos que en el Área Metropolitana de Buenos Aires- a mejorar la atención a las mujeres y a perfeccionar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, atendiendo a las razones que

proporcionan las propias mujeres, registrando su historia clínica y eliminando obstáculos para acceder a la medicación.

A pesar del respaldo que el Protocolo brinda a estos profesionales, no evita la arbitrariedad y por tanto la inseguridad, precisamente porque deja en manos del profesional la valoración e interpretación de las causas esgrimidas para la interrupción del embarazo. Por eso, desde las diferentes instancias y asociaciones que defienden este derecho, se insiste en la necesidad de que exista una norma con fuerza de ley que regule este asunto en Argentina, por encima del activismo religioso u conservador. (Fernández, S. 2018, p. 157, 158)

A este fin están dirigidas las sucesivas presentaciones, desde 2007, del proyecto de ley de Interrupción Voluntarias del Embarazo.

## 2.2. Contexto sociopolítico en Argentina

Con un tamaño que es aproximadamente seis veces el de España, el territorio argentino en lo político es una República Federal dividida en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires. Las provincias están divididas en departamentos, compuestos por municipios. Las provincias, excepto la de Buenos Aires y la ciudad autónoma, mantienen tratados interprovinciales de integración y forman cuatro regiones: Norte Grande (dividido en Nordeste de Argentina y Noroeste de Argentina), Nuevo Cuyo, Patagonia y Centro. Al frente de cada provincia hay un Gobernador o jefe de Gobierno que nombra a ministros de las diferentes áreas.

La constitución vigente es la de 1994, que establece un sistema presidencial, bicameral y federal. El actual presidente es Mauricio Macri elegido en 2015 al frente de la coalición de centro derecha “Cambiamos”. La vicepresidencia también es un cargo electo y ocupa también la presidencia del Senado, la cámara que representa a las provincias (3 senadores por provincia).<sup>4</sup>

Según el estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizado en 2008 (Mallimaci, Cruz e Irrazábal, 2008), el 76% de los argentinos se declara católico y hay una creciente penetración de las iglesias evangélicas. Pero un 76% de los argentinos dicen acudir poco o nunca a los lugares de culto. Ese estudio retrata una importante autonomía de conciencia de los católicos respecto al aborto. Tan sólo un 16,9 sigue la postura oficial de la Iglesia sobre su prohibición total y un 68,6% de los que se declaran católicos está de acuerdo con permitirlo en determinados supuestos. Los datos provincializados de este estudio reflejan también la división que señalábamos antes con el voto en las cámaras legislativas.

---

<sup>4</sup> La descripción del sistema político de Argentina procede de varias fuentes generalistas, la más actualizada de ellas es la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España (2019).

ABORTO	CAPITAL Y GBA	CENTRO	NEA	NOA	CUYO	SUR
Permitido en algunas circunstancias	63,7	66,7	65,0	59,7	58,3	57,4
Prohibido en todos los casos	12,9	14,8	25,5	26,7	32,3	12,3
Es un derecho de la mujer	19,1	13,0	6,8	10,2	7,0	12,2

Nota: Recuperado de “*Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en argentina*”, de Mallimaci, Cruz e Irrazábal, 2008 p.7

Las elecciones presidenciales, cada cuatro años, se celebran en Argentina en tres etapas: unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el mes de agosto, una primera vuelta en octubre y una segunda vuelta en noviembre. Las elecciones legislativas son parciales cada dos años, cuando se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, con mandato de cuatro años y un tercio de los senadores, que tienen un mandato de 6. También éste es un año electoral para el legislativo y en las provincias.

Tradicionalmente Argentina ha sido un país con una importante movilización social y con un marcado acento en la regulación progresista de derechos y libertades. En la región, fue uno de los primeros países con sufragio femenino, con una mujer ocupando la presidencia del gobierno o en aprobar la ley del matrimonio entre homosexuales.

Durante la tramitación del proyecto en 2018 el debate público se incrementó considerablemente. Los grupos a favor de la despenalización, con mucha presencia juvenil y con el pañuelo verde como símbolo, ocuparon las calles, las redes sociales y los programas de televisión y consiguieron el respaldo de los personajes más populares de la sociedad. La presión social fue considerable con marchas, manifestaciones, concentraciones o vigiliadas a las puertas del Palacio del Congreso de la Nación Argentina. También por parte de los grupos en contra de la despenalización con marchas encabezadas por una gran figura de un bebé y, sobre todo, con numerosas homilías en las iglesias en las que los sacerdotes proclamaban “la defensa de la vida”.

Numerosas crónicas periodísticas se hacen eco del cambio social que retrata el movimiento en pro de la despenalización<sup>5</sup>. La reivindicación del aborto, en los últimos años, está acompañada por otras reivindicaciones del activismo de género: contra el acoso callejero, por el lenguaje inclusivo, contra los micromachismos, ... Al tiempo que avanzaban los procedimientos legislativos, el debate traspasó las fronteras de la política y se convirtió en un debate social no solo sobre las interrupciones voluntarias del embarazo, sino también sobre todos los temas asociados de la vida, el papel del Estado, la salud pública, el género y el sexo.

La viveza del debate en torno a la despenalización del aborto en Argentina también está relacionada con la creciente oleada feminista, conocida como cuarta ola, que se extiende con especial fuerza por la región. Como estamos viendo, cada vez más voces denuncian el problema de la clandestinidad de los abortos en mujeres y niñas, un problema que se relaciona con la pobreza, las escasas coberturas del Estado, la violencia machista, la vulnerabilidad o la desigualdad. Estas situaciones son tradicionalmente legisladas desde la prohibición, la negación, el paternalismo o el desprecio hacia la mujer y su cuerpo, ignorando que también las mujeres son sujetos de derechos. Esto ha provocado una mayor reacción que ha traspasado los límites del movimiento feminista tradicional. Florencia Alcaraz, a raíz del Paro Internacional de Mujeres de 2017, la definió como:

“Es un feminismo popular, que se construye de abajo hacia arriba, que tiene un componente muy vinculado a los movimientos sociales y que habilita a muchas más a ser feministas. (...) Se corrieron los márgenes y los límites y el feminismo logró llegar a muchísimas más mujeres” (Citado en Titto, 2017)

La prueba de que el debate público sobre el aborto está firmemente instalado en Argentina es que el pasado 28 de mayo, declarado desde 2005 como día de acción por la salud de las mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (2019) presentó de nuevo el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el habitual despliegue de concentraciones, “pañuelazos” y actividades por todo el país. Este nuevo intento legislativo pretende aprovechar los procesos

---

<sup>5</sup> La descripción de la situación aparece en muchos artículos periodísticos; destacamos por su interés los de Daniel Pardo para la BBC (2018 a, 2018 b) o los publicados en El País por Carlos E. Cué (2018) y Centenera (2019)

electorales más inmediatos, situando el debate sobre el aborto en el centro de las campañas electorales. En declaraciones al periódico El País, Martha Rosenberg dijo: “Este año que tenemos campaña electoral el aborto tiene que estar en la agenda política y los candidatos y candidatas tienen que referirse. Queremos que no se pueda votar sin saber su posición” (Centenera, 2019)



### 3. ANÁLISIS DEL PROCESO

En 2018, la tramitación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo generó un considerable impacto en Argentina. Las discusiones y votaciones en las cámaras fueron seguidas con atención, el debate se abrió a toda la sociedad y las calles fueron escenario de numerosas marchas y concentraciones a favor y en contra:

“La última presentación del proyecto de ley desencadenó un proceso nunca visto: diarios, programas de televisión y redes virtuales sosteniendo el tema durante meses; las sesiones informativas en las que expusieron personas relacionadas al mundo académico, de la cultura, el arte y la ciencia, no solo se filmaban, sino que se podía acceder a ellas”. Mónica Tarducci (2018)

#### 3.1 Proceso político

El proceso que culminó con el debate y votación parlamentaria del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue iniciado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. (Tarducci, 2018) Esta es una agrupación de organizaciones y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del feminismo que en 2007 presentó el proyecto por primera vez. A pesar de los rechazos, continuaron presentando el texto en años siguientes hasta llegar a 2018, que se presentó por séptima vez y consiguió ser tramitado. Cuatro diputadas de diferentes partidos fueron las encargadas de esta presentación<sup>6</sup>. La tramitación comenzó el 10 de abril con exposiciones de expertos y representantes de organizaciones. (Congreso Diputados Argentina, 2018, 12 junio). Cada congresista podía proponer hasta cuatro de estos expositores. Las comisiones encargadas de estas comparecencias fueron las de Legislación General, Legislación Penal, la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y también la de Acción Social y Salud Pública. Finalmente fueron 738 comparecientes los que participaron en estas comisiones: científicos, intelectuales, artistas, líderes religiosos, médicos y abogados pasaron por el Parlamento durante casi dos meses en audiencias públicas. (“Puntos centrales sobre el debate por el aborto legal en Diputados” (2018)). El proyecto fue sometido a votación en la sesión de la Cámara de Diputados

---

<sup>6</sup> Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (Unión Cívica Radical), Romina del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda) y Mónica Macha (Frente para la Victoria)

del 13 de junio con un debate previo que se extendió durante 23 horas, con la intervención de más de un centenar de diputados.

En cuanto a los argumentos utilizados en estos debates, fueron, en resumen, los siguientes:

A favor de la despenalización

- El aborto es una cuestión de salud pública
- La mujer tiene libertad y autonomía para decidir sobre su propio cuerpo
- Peligro mortal o de graves secuelas físicas y psicológicas de los abortos clandestinos

En contra de la despenalización:

- Es un asunto de defensa de la vida
- Son prioritarios los derechos del niño por nacer
- La vida se inicia en el momento de la concepción
- Es irrenunciable la obligación de proteger la vida<sup>7</sup>

No hubo disciplina de voto y en todos los partidos se recogieron votos a favor y en contra del proyecto. Incluso entre los ministros del gobierno hubo votos en ambos sentidos. El propio presidente, con una posición contraria al aborto, era el que había animado que se abriera este proceso de debate, adoptando una postura neutra (Politi, 2018). Los principales partidos y coaliciones votaron así<sup>8</sup> :

- Cambiemos (en el Gobierno) 42 sí y 65 no
- Frente para la Victoria 54 sí y 11 no
- Argentina Federal 11 sí y 21 no
- Frente Renovador-Unidos por una Nueva Argentina 8 sí y 13 no
- Otros (partidos regionales) 9 sí 15 no

El resultado final fue de 129 a favor y 125 en contra.<sup>9</sup>

En el Senado, el debate previo se hizo en tres comisiones: Salud, Justicia y Asuntos Constitucionales (Infobae, 2018). Un dictamen preliminar se emitió el 1 de agosto y el asunto llegó a votación en la sesión del 8 de agosto en la que intervinieron 62 senadores

---

<sup>7</sup> En el portal del Congreso de Argentina puede leerse resúmenes de todos los oradores. (Oradores a favor de la despenalización, 2018) (Oradores en contra de la despenalización, 2018)

<sup>8</sup> El resultado de las votaciones se puede consultar en <https://votaciones.hcdn.gob.ar/votacion/3805>

<sup>9</sup> Con el título “Tras una crucial votación, se dio media sanción al proyecto de despenalización del aborto” (2018) aparece relatado en el portal del Congreso.

y duró 17 horas<sup>10</sup>. En el uso de la palabra los senadores insistieron en los argumentos resumidos antes. Finalmente, los resultados de la votación en el Senado fueron:

- Cambiemos 8 sí 17 no
- Partido Justicialista 12 si 11 no y 1 abstención
- Peronismo Federal 1 si 3 no y 1 abstención
- Frente para la Victoria 8 si y 3 no
- Otros: 2 si y 6 no

El resultado final fue de 31 votos a favor, 38 en contra y 2 abstenciones, por lo que el proyecto fue rechazado. Según la legislación argentina, el proyecto no podía presentarse de nuevo hasta el siguiente periodo de sesiones, que ha comenzado en abril de 2019.

---

<sup>10</sup> Un resumen de las 62 intervenciones aparece en “El Senado trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo” (2018)

### 3.2 Proceso social



PrensaObrera.com (2018, 13 junio) “En las calles, la multitud a favor de la ley impuso su presencia”. Recuperado de <https://prensaobrero.com/politicas/42817-en-las-calles-la-multitud-a-favor-de-la-ley-impuso-su-presencia>

Las largas horas de debate final y de votación en ambas cámaras, una multitud permaneció concentrada en la plaza del Congreso de Buenos Aires. Los grupos a favor y en contra del proyecto de ley, cada uno en un lateral de la plaza, estaban separados por la policía en una imagen que es fiel reflejo de la división social que el debate del aborto ha producido en el país.

La movilización feminista en las calles a esas alturas no era ninguna novedad. El aborto había servido en Argentina como catalizador del activismo en pro de los derechos de las mujeres que ya había comenzado tiempo antes. (Tarducci, 2018)

Los antecedentes (Tarducci, 2018) más remotos son los de la década de los años 70 del siglo XX y en la creación de la Unión Feminista Argentina y del Movimiento de Liberación Feminista, que pronunciaron las primeras reclamaciones sobre el derecho al aborto. En 1992 se presenta por primera vez un anteproyecto de ley sobre anticoncepción y aborto a cargo de una comisión surgida de un encuentro feminista celebrado dos años antes. Ahí ya aparecen conceptos como la distinción entre legalización y despenalización (la segunda no garantiza la posibilidad de que los abortos se realicen en el sistema público de salud) o la incorporación de la definición de salud

integral de la OMS. Los 90 fueron años de lucha contra el neoliberalismo de Carlos Menem, al que se consiguió frenar una reforma de la Constitución que pretendía incluir una cláusula de defensa de la vida desde la concepción.

A comienzos de siglo, se adopta el pañuelo verde de Católicas por el Derecho a Decidir como símbolo de esta reivindicación y surge, en 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que ha conseguido concentrar la movilización, atrayendo a sus manifestaciones a un creciente número de activistas, en especial jóvenes.

Existe una “marca generacional” (Elizalde y Mateo, 2018) en el activismo feminista argentino. Es una joven marea verde que entiende que la batalla cultural por la legalización ya se ha ganado porque todo el proceso de lucha ha servido para una despenalización social del aborto que ha pasado de ser un tema tabú, a convertirse en centro de la discusión política y social.

La Campaña Nacional y la lucha feminista tomaron un nuevo impulso a partir de 2015 con el movimiento #NiUnaMenos, surgido en las redes, pero con gran impacto en las calles en protestas contra los asesinatos machistas y que ha incorporado otras muchas reivindicaciones de igualdad de derechos.

Al otro lado de la plaza, el movimiento autodenominado “pro vida” también ha protagonizado estos últimos años una importante movilización y ha conseguido numerosas adhesiones. De hecho, Argentina fue el primer país en el que se fijó el 25 de marzo como “Día del Niño por Nacer” por un decreto del presidente Menem. (AICA, 2019)

El impulso a esta postura proviene de la Iglesia Católica. Acción Católica inició ya en 2011 una campaña que en poco tiempo consiguió que decenas de ciudades y algunas provincias se declararan “pro vida” (GaudiomPress, 2012). Misas, marchas, ecografías en vivo, han sido algunas de las constantes de este movimiento que ha elegido como símbolo el pañuelo de color celeste. L.Rosende y W.Pertot (2018) documentaron en un reciente reportaje de investigación la existencia de una trama de ONG’s “pro vida” que se activaron especialmente tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados. Los autores defienden que era una estrategia ya conocida, puesto que ya se produjeron “reacciones anti derechos” en otros momentos, como la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, con motivo de las políticas sobre educación sexual, contra la

Ley de Identidad de Género o en las discusiones por el nuevo Código Civil. De hecho, durante esos periodos, se agruparon, con el nacimiento de la Red Federal de Familia o con la Unión PRO-VIDA, que agrupa a 150 organizaciones contrarias al aborto.

El texto llama la atención sobre las decenas de grupos que aparecen en las manifestaciones, aunque observa algunas diferencias. De un lado están las ONG's que se encargan de alimentar las marchas y campañas en redes sociales, con un importante componente de católicos de base. Entre ellos, especialmente activos, los evangélicos de la organización ACIERA y la ONG +Vida. El segundo grupo no participa en estas movilizaciones y es el que aportó la mayor parte de comparecientes en el Congreso y el Senado: "...son jefes de servicio de un hospital, abogados, especialistas en bioética. (...) Difieren en sus estrategias de participación en el espacio público: unos funcionan como expertos, otros hacen acciones *performativas*" (Rosende y Pertot, 2018)

Su participación en las comisiones fue bastante uniforme - "hasta repetían los mismos videos" (Rosende y Pertot, 2018)- pero entre manifestantes y expertos, todos centran su argumentación en la existencia de vida desde la concepción. Aunque la Iglesia tradicionalmente no se ha involucrado públicamente con estos grupos, tras la votación del Congreso, animaron las manifestaciones con un comunicado de apoyo.

Tanto expertos como políticos tuvieron ocasión de enfrentar sus argumentos con ocasión de su paso por las comisiones y en las sesiones de las cámaras. Como queda señalado más arriba, los argumentarios de una y otra parte quedaron pronto delimitados y se repitieron con insistencia, solo enriquecido por las comparencias de numerosos expertos. De hecho, las mayores diferencias se encuentran en el estilo de las exposiciones o la vehemencia de los discursos, más que en la originalidad de los argumentos. Pero para dejar constancia del desarrollo de estos debates, hemos entresacado de las muchas horas grabaciones en video que proporciona el Congreso y el Senado de Argentina, algunos fragmentos en los que se defienden cada uno de los principales argumentos utilizados de forma insistente en esta polémica.

## A FAVOR

- Es un **problema de salud pública**. Diputada Carolina Moisés: "Yo vengo de una ciudad que se llama San Pedro de Jujuy, son 80.000 habitantes, 1.200

nacimientos por año en el hospital público. Estoy convencida, porque tenemos información fehaciente de las estadísticas que llevan las enfermeras, los médicos comprometidos, los agentes de atención primaria de la salud, que hay 2.500 abortos por año en mi ciudad. ¿Cuántas ciudades como esa hay en este país? ¿Cuántas muertes son necesarias para que tomemos conciencia? (...) ¿Cuántas contamos? ¿Contamos también las que llegan a los hospitales con hemorragias masivas, con hemorragias intestinales, con perforación de útero, con septicemia...? Porque eso les pasa a las mujeres pobres, eso les pasa a las que no tienen cómo recurrir a un aborto seguro; clandestino, pero seguro. (...) Como legisladores nacionales tenemos que ser capaces de entender que este es un problema de salud pública (...) Tenemos que dejar de lado nuestros valores religiosos, nuestros principios morales, porque no estamos legislando acá para nosotros mismos, ni para nuestros círculos de amistad, ni para nuestros círculos sociales, ni para nuestras estructuras de pensamiento o de religión. Estamos trabajando para las mujeres argentinas”. (Congreso Diputados Argentina, 2018, 13 junio c)

- **Negación de los derechos de las mujeres.** Doctora Stella Maris Manzano, tocoginecóloga y especialista en medicina legal: “Los médicos que niegan abortos, matan mujeres, nos matan porque podemos morir en los partos. (...) Rogamos que nos respeten porque quien no puede oír a niñas y mujeres, dudo que pueda oír a fetos que no hablan. (...) El relator especial contra la tortura ha dicho que negar abortos, negar analgesia en abortos, cosa que hemos visto hacer, es tortura. La OMS, la CEDAW dice que tenemos que tener igualdad de acceso a los servicios de salud, inclusive los de planificación familiar. ¿Igualdad de acceso si de 15 ginecólogos, puede que uno solo me quiera atender? Si hay provincias enteras donde no lo hay”. (Senado Argentina. 2018, 18 julio b)
- **El goce también es fundamental.** Senador Fernando Solanas: “Me coloco en la posición y en la actitud de los chicos de 14, 15, 16 años, que se aman, señora Presidenta, se aman. ¿O les vamos a enseñar que deben o no amarse? Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer el goce, señora Presidenta, que es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundo sacrificio, ¿qué derecho tiene el pobre además? En la crisis brutal que

vive la Argentina ¿no le queda el derecho de amarse? (Senado Argentina, 2018, 8 agosto c)

- **Problema para las mujeres pobres.** Diputado Daniel Arroyo: “Tengo claro que la pobreza tiene múltiples dimensiones y nadie debería tomar este punto para analizar la pobreza, pero sí tengo la certeza de que las mujeres vulnerables, las mujeres más pobres, abortan en las peores condiciones de salud, en las peores condiciones posibles. Por esta razón, priorizo a la hora de votar la cuestión de la salud pública”. (Congreso Diputados Argentina, 2018, 18 julio)
- **Educación sexual, acceso a anticonceptivos y aborto legal.** Senadora María Inés Pilatti: “(leyendo una carta de un padre a su hija) Educación sexual integral, desde el jardín, para decidir. Anticonceptivos a demanda, para no abortar. Y aborto legal para no morir en esa secuencia lógica. Ojalá jamás estés en la encrucijada de tener que decidir abortar. Ojalá, vos y todas, tengan que siquiera pensarlo. Pero si por las vicisitudes o las malditas vueltas de la vida, alguna vez estás en ese lugar y decidís abortar, lucharé para que sea en el hospital, cuidada, contenida y abrazada, con ecografías, controles y pastillas. No lo dudes, más temprano que tarde, será ley”. (Senado Argentina, 2018, 8 agosto a)
- **Autorizar el aborto es dar respuesta a problemas graves.** Doctora Alicia Stokilner, psicóloga especialista en salud pública y salud mental: “Me llama la atención un silencio. Acá se ha hablado mucho de posibles financiaciones, negocios de embriones, etcétera. Se ha hablado del negocio ilegal del aborto, que es un negocio impresionante y algunos de los que lo practican deben ser de los que están tratando de instalar un discurso anti-ley. Lo que no se habló (...) es del tráfico de niños y del tráfico de bebés, que la clandestinidad del aborto favorece de manera increíble. (...) En este país se trafican niños. El Banco Nacional de Datos Genéticos tiene 10.000 muestras de jóvenes que tratan de recuperar su identidad. (...) El 80 por ciento de los niños que nacen sin haber sido maternizados (...) se comercian en el tráfico”. (Senado Argentina, 2018, 18 julio a)



- **Fracaso de la penalización.** Diputada Lorena Matzén: “Hoy tenemos la opción de decidir por tener aborto fuera de la clandestinidad. (...) El aborto siempre existió. Su criminalización no impidió su práctica. Negarlo y ocultarlo no bajó los índices de mortalidad de miles de mujeres, en su mayoría menores de 20 años. (...) La hipocresía no debe ser el patrón de acción. La legalización incluye todas las posturas. Estoy convencida que la legalización amplía las libertades y cuida nuestro sistema sanitario. (...) Yo también soy provida, yo también quiero salvar las dos vidas. Con mi voto quiero salvar a aquellas mujeres que ya tomaron esta decisión dolorosa. Les aseguro que no habrá menos madres; habrá menos mujeres en riesgo”. (Congreso Diputados Argentina, 2018, 13 de junio b)

## EN CONTRA

- **Defensa de la vida.** Senadora Ivana Bianchi: “El respeto a la vida humana es un derecho inherente al ser humano en todas las civilizaciones. Si este derecho primordial no es protegido y más aún en este caso, la vida de miles de pequeños indefensos que, aunque no puedan ser oídos, son sujetos de derecho, creemos que estamos entrando como sociedad en una etapa de desprecio incontrolable por la vida humana. ¿Cómo puede ser que el derecho a la vida, fundamento y raíz de todos los demás derechos sea cuestionado y pisoteado con tanta facilidad?” (Senado Argentina, 2018, 13 de junio)
- **Son prioritarios los derechos del niño por nacer.** Diputada Carla Pitiot: No hay categorías de vidas, algunas que valgan más y algunas que valgan menos. Y no podemos ser nosotros los que determinemos cuál vida vale más y cuál vida vale menos. Esta ley va a abrir una puerta peligrosísima a malas interpretaciones, porque no vamos a estar nosotros todo el tiempo para determinar cuándo corresponde o no y cuándo una vida vale más que la otra”. (Congreso Diputados Argentina, 2018, 13 de junio a)
- **El aborto no es una emergencia de salud pública.** Senadora María Cristina Fiore: “Cuando vamos a las causas de muerte materna, el tema del aborto es la causa número cuarenta. Digo que ¿no nos tenemos que ocupar de los abortos?

No, señora presidenta, no lo digo bajo ningún punto de vista. Lo que digo es que estaría muy bueno tener un ministro que se preocupe de las 39 causas anteriores”. (Senado Argentina, 2018, 8 agosto b)

- **Inconstitucionalidad y contra tratados internacionales.** Diputado Diego Mestre: (Tras detallar artículos de la Constitución y de los tratados internacionales que a su juicio viola esta ley) “Por eso, señor presidente, el análisis jurídico es muy claro. Estoy convencido que esta ley es inconstitucional y que, si pasa al Senado y luego es finalmente sancionada, seguramente que es la justicia la que a través de una demanda va a declarar la inconstitucionalidad de esta ley.” (Congreso Diputados Argentina, 2018, 13 de junio d)
- **Vida desde el momento de la concepción.** Doctora Zelmira Botini, pediatra, profesora de la Pontificia Universidad Católica Argentina: “Podría aceptarse el argumento de que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, sin embargo, no tiene ningún derecho sobre el cuerpo ajeno. El hijo en gestación no es parte de su cuerpo, solo reside en su cuerpo y durante cierto tiempo. Otorgar un valor distinto a la vida de seres humanos por la etapa del desarrollo que transitan, constituye una discriminación injusta y un atropello a su derecho a la vida”. (Senado Argentina, 2018, 11 julio)
- **El aborto no es la solución.** Karen Krevtz, abogada y representante de Jóvenes Profesionales Pro-Vida de Mendoza: “Yo creo que la fortaleza y la madurez de un Estado se encuentra en aquella protección y asistencia que yo le doy a los más vulnerables. Y no me estoy refiriendo a un mero asistencialismo, un “te doy los recursos, te doy el dinero y se acabó”, no, es darte las herramientas para que vos puedas desarrollarte por vos mismo. Es darte los instrumentos para que vos puedas progresar por vos mismo. Eso es el empoderamiento. (...) Tenemos la oportunidad de ser pioneros en el mundo. Pioneros en la defensa y en la creación de políticas que protegen a la mujer y a la persona por nacer”. (Senado Argentina, 2018, 25 de julio)
- **Contra las limitaciones a la objeción de conciencia.** Inés Franck, abogada y licenciada en Ciencias Políticas: “En un estado democrático no se puede obligar

a las personas a actuar contra sus valores y convicciones personales más íntimas. Hablo de las personas. Esto violenta su libertad más profunda en lo que constituye uno de los más claros signos de pretensión totalitaria y dictatorial de la historia contemporánea, de los cuales, sin ninguna duda, este proyecto puede cabalmente enorgullecerse”. (Senado Argentina, 2018, 10 julio)

#### 4. CONCLUSIONES

El debate en torno al aborto ha provocado una extraordinaria polarización social y política en Argentina. El impulso a la reforma legislativa desde los movimientos civiles y feministas hace presagiar que el tema seguirá presente en la agenda pública. Es lógico pensarlo por el importante componente de juventud movilizada que se ha podido ver en este movimiento.

Hay que destacar la riqueza de todo el proceso del debate de la ley en 2018. El paso por las dos cámaras vino precedido por la contribución de centenares de expertos –algunos no tanto- en las comisiones, con exposiciones servidas en directo y que se mantienen a disposición del público. A la hora de votar, los partidos ofrecieron libertad a diputados y senadores. Fue el propio presidente –contrario a la ley- el que animó su toma en consideración.

Este debate y sus movilizaciones paralelas, ha servido para aglutinar a otras muchas reivindicaciones y demandas que han aprovechado para ganar visibilidad a través de las manifestaciones y “pañuelazos”: desde las reclamaciones de laicidad del Estado a la violencia machista u otras muchas desigualdades.

Precisamente, la mayor oposición a este movimiento viene de las iglesias, especialmente la católica. Aunque lógicamente los partidos de derecha son los más permeables a esta influencia, la réplica a las organizaciones impulsoras de la ley de interrupción del embarazo, la da en las calles el movimiento autodenominado “provida”, mientras que en las tribunas actúa una élite de médicos, abogados y científicos que mantienen una línea de especial insistencia en la reivindicación del comienzo de la vida con la concepción, un típico principio doctrinal de la Iglesia Católica. De lo que automáticamente este pensamiento deduce que el embrión no nacido es plenamente un ser humano, y como tal, sujeto de derechos, que es el punto desde el que arranca toda su argumentación.

En contra de eso, el núcleo de los argumentos gira en torno a los derechos humanos, en los que han de incluirse los sexuales y reproductivos, y en la terrible realidad de las consecuencias de mantener un sistema que alienta los abortos clandestinos, aunque en el

debate, tal vez se echa en falta una actitud más combativa contra el argumento (presentado como principio científico incuestionable) de que existe un ser humano desde el momento de la concepción.

## 5.BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

### 5.1.Monografías y artículos

Barrancos, D. (2011). “Género y ciudadanía en la Argentina”. *Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 41(1-2), 23–39. Disponible en: [http://www.lai.su.se/polopoly\\_fs/1.249342.1443101722!/menu/standard/file/06-Barrancos.pdf](http://www.lai.su.se/polopoly_fs/1.249342.1443101722!/menu/standard/file/06-Barrancos.pdf)

Bergallo, P. y Ramón, A. (2009, 9 abril). “El aborto no punible en el derecho argentino”. *despenalizacion.org.ar*, 1(09). Disponible en: [file:///C:/Users/pc4/Downloads/El aborto no punible en el derecho argen.pdf](file:///C:/Users/pc4/Downloads/El%20aborto%20no%20punible%20en%20el%20derecho%20argen.pdf)

Cano, J. E. (2016). De la ciudadanía política a la ciudadanía sexual. Debates políticos en Argentina en relación con el cuerpo de las mujeres. *Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia*, (11), 151–170. Disponible en: <https://doi.org/10.18002/cg.v0i11.3624>

Cruz, A. e Yannoulas, S. C. (2011). “Assédios sexual e moral no trabalho um estudo acerca da legislação no Brasil”. *Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 41(1-2), 137–170. Disponible en: [http://www.lai.su.se/polopoly\\_fs/1.249338.1443101862!/menu/standard/file/10-Cruz%20Yannoulas.pdf](http://www.lai.su.se/polopoly_fs/1.249338.1443101862!/menu/standard/file/10-Cruz%20Yannoulas.pdf)

Elizalde, S. y Mateo, N. (2018). “Las jóvenes: entre la “marea verde” y la decisión de abortar”. *Salud colectiva*, 14(3), 433–446. Disponible en: <file:///C:/Users/PROV0011/Downloads/Dialnet-LasJovenesEntreLaMareaVerdeYLaDecisionDeAbortar-6795713.pdf>

Felitti, K. (2014). “Configuraciones de la laicidad en los debates por la legalización del aborto en la Argentina: discursos parlamentarios y feministas (2015-2018)”. *Salud colectiva*, 3(18), 405–423. Disponible en: <file:///C:/Users/PROV0011/Downloads/Dialnet-ConfiguracionesDeLaLaicidadEnLosDebatesPorLaLegali-6795711.pdf>

Fernández, S. (2017). “Políticas públicas difusas: la implementación de las consejerías pre y post aborto en Argentina”. *RIPS: Revista de investigaciones políticas y sociológicas*, 16 (1) 87-98. Disponible en:

<http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/view/3862/4342>

Fernández, S. (2018). “Políticas públicas de aborto en transición: de las consejerías pre y post aborto a las interrupciones legales del embarazo en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. *Revista de Bioética y Derecho*, (43), 145–160. Disponible en:

<http://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n43/1886-5887-bioetica-43-00145.pdf>

Gebruers, C., y Gherardi, N. (2015, agosto). “El aborto legal en Argentina: la justicia después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso “F.A.L.”.” *Revista REDAAS Red de Acceso al Aborto Seguro*, 1(2). Disponible en:

[file:///C:/Users/PROV0011/Downloads/Adjunto%20PDF%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PROV0011/Downloads/Adjunto%20PDF%20(1).pdf)

Hopp, C. M. (2009). “El caso “pro familia”: militancias y resistencias en torno al aborto legal”. *Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Derecho PCP*, (63), 95–138. Disponible en:

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34438.pdf>

Mallimaci, F., Cruz, J., e Irrazábal, G. (2008). *Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en argentina*. Disponible en: <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2013/02/encuesta1.pdf>

Maquieira, V. (2012).” Introducción: Género y Derechos Humanos en el Cono Sur”. *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 41(1-2), pp.15–21. DOI: <http://doi.org/10.16993/ibero.44>

Monte, M. E. (2018). “Disputas sobre la regulación jurídica del aborto en Argentina. La abogacía feminista frente a resistencias conservadoras en el proceso judicial T.S”.

(2000): ecografía, visualización fetal y producción del discurso jurídico. *Oñati Socio-legal Series*, 8(5), 722–738. Disponible en:

<http://opo.ijsj.net/index.php/osls/article/viewFile/1006/1119>

- Monte, M. E, y Vaggione, J. M. (2019). "Cortes irrumpidas. La judicialización conservadora del aborto en Argentina". *Rupturas*, 9(1), 107–125. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6671417>
- Pautassi, L. C. (2011). "Al compás de la nostalgia. Género y relaciones laborales en el Cono Sur". *Iberoamericana. "Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 41(1-2), 41–74. Disponible en: <https://doi.org/10.16993/ibero.46>
- Pautassi, L. C. (2016). "La complejidad de articular derechos: alimentación y cuidado". *Salud Colectiva*, 124, 621–634. Disponible en: <https://doi.org/10.18294/sc.2016.941>
- Rosende, L., y Pertot, W. (2018). "Aborto en el Senado. Quienes llevan los pañuelos celestes". *Anfibia. Universidad Nacional de San Martín*. Disponible en: <http://revistaanfibia.com/cronica/quienes-llevan-los-panuelos-celestes/>
- Tarducci, M. (2018). "Escenas claves de la lucha por el derecho al aborto en Argentina". *Salud colectiva*, 14(3), 425–432. Disponible en: <file:///C:/Users/PROV0011/Downloads/Dialnet-EscenasClavesDeLaLuchaPorElDerechoAlAbortoEnArgent-6795712.pdf>

## 5.2.Fuentes e informes Internet

- Amnistía Internacional (2017, septiembre) El acceso al aborto en Argentina. Una deuda Pendiente. Recuperado 14 de marzo 2019, en: <https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/10/EL-ACCESO-AL-ABORTO-EN-ARGENTINA-%C3%9Altimo-actualizado.pdf>
- Asamblea Naciones Unidas. (1979, 18 diciembre). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer [Publicación en un foro]. Recuperado 14 marzo, 2019, disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>
- Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) (1997). *Primera Declaración Derechos Sexuales. En 13ª. Congreso Mundial de Sexología. Valencia*. Disponible en: <http://www.espill.org/wp-content/uploads/2016/01/Derechos-Sexuales-1997.pdf>



Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. (2019, 28 marzo). Recuperado 5 MAYO, 2019 de <http://www.abortolegal.com.ar/28m-de-las-calles-al-congreso-y-del-congreso-a-las-calles-decimos-aborto-legal-ya/>

Camila [cherryssandewine] (2018, agosto, 5) **#YoAborte con pastillas a los 25** años [Tweet] Recuperado de: <https://twitter.com/cherryssandewine/status/1026335826643443712>

Center for Reproductive Rights; <https://reproductiverights.org/worldabortionlaws>

CEPAL. (2013). *Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo*. Disponible en: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf)

CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA , 1984 (Libro II de los Delitos). Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#25>

Congreso Diputados Argentina. (2018, 12 junio). Texto completo del dictamen sobre el aborto. Recuperado de: [https://www.diputados.gov.ar/prensa/noticias/2018/despenalizacion-aborto/noticias\\_0595.html](https://www.diputados.gov.ar/prensa/noticias/2018/despenalizacion-aborto/noticias_0595.html)

- (2018, 13 de junio a) Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=BswwINxrvvg&t=355s> (7:16-7:41)
- (2018, 13 de junio b) Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=r53T5aoZLX4> (1:42 – 5:13)
- (2018, 13 junio c) Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=kZnpFTbU9tY&t=611s> (9:13-11:32)
- (2018, 13 de junio d) Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=4DTdMFYRWUQ> (5:19-5:45)
- (2018, 18 julio) Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ZPIMrdiMHCo> (0:46 – 1:14)

Declaración de Madrid a favor de la vida humana naciente ante la iniciativa de una ley de plazos como régimen jurídico del aborto (2019, 17 marzo). Recuperado 3 abril, 2019, de [http://civica.com.es/drupal/sites/default/files/declaracion\\_de\\_madrid.pdf](http://civica.com.es/drupal/sites/default/files/declaracion_de_madrid.pdf)

En contra de la utilización ideológica de los hechos científicos. (2009, 21 mayo). Recuperado 3 abril, 2019, de <https://cienciasycosas.com/2009/05/21/en-contra-de-la-utilizacion-ideologica-de-los-hechos-cientificos/>

Fundación para el estudio e investigación de la mujer. (2016). *Recomendaciones del Comité de la CEDAW al gobierno argentino*. Disponible en <http://feim.org.ar/2016/11/21/recomendaciones-del-comite-de-la-cedaw-al-gobierno-argentino/>

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. (2019). *Ficha país: Argentina*. Recuperado de: [http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGENTINA\\_FICHA%20PAIS.pdf](http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGENTINA_FICHA%20PAIS.pdf)

Oradores a favor de la despenalización. (2018, 13 junio). Recuperado 23 marzo, 2019, de [https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/2018/despenalizacion-aborto/noticias\\_0596.html](https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/2018/despenalizacion-aborto/noticias_0596.html)

Oradores en contra de la despenalización. (2018, 13 junio). Recuperado 23 marzo, 2019, de [https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/2018/despenalizacion-aborto/noticias\\_0597.html](https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/2018/despenalizacion-aborto/noticias_0597.html)

Organización Mundial de la Salud. (2017). *Salud y Derechos Humanos*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health>

Programa Salud Sexual y Reproductiva. (2017). *La regulación de la interrupción legal del embarazo en Argentina. Los principios que estableció la Corte Suprema de Justicia en el caso “FAL”, marzo de 2012*. Recuperado de: <http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/srpr/files/2017/03/4.-NT-Fallo-FAL-2017-VF.pdf>

“Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Argentina)”. Fecha de consulta: 20, marzo, 2019 en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto\\_de\\_Ley\\_de\\_Interrupci%C3%B3n\\_Voluntaria\\_de\\_l\\_Embarazo\\_\(Argentina\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Ley_de_Interrupci%C3%B3n_Voluntaria_de_l_Embarazo_(Argentina))

Senado Argentina (2018, 8 agosto). El Senado trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Recuperado 4 abril, 2019, de:

<https://www.senado.gov.ar/bundles/senadomicrositios/pdf/despenalizacion-aborto/comunicados.pdf>

- (2018, 13 de junio) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=IqoIxUyqfOE&t=188s> (0:12-0:48)
- (2018, 10 julio ) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=WPIZay2EX60> (5:23)
- (2018, 11 julio) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=iyDekYGzQcw&t=206s> (3:26 -3:55)
- ( 2018, 18 julio a) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=d4zb2GWhcNM> (7:50-9:12)
- (2018, 18 julio c) Recuperado de:  
[https://www.youtube.com/results?search\\_query=a+favor+stella+maris+manzano&sp=MAEB](https://www.youtube.com/results?search_query=a+favor+stella+maris+manzano&sp=MAEB) (13:33 -14:48)
- (2018, 25 de julio) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ULpbvDtLGqI> (8:02-9:57)
- ( 2018, 8 agosto a) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=nn6R4WoMX3s&t=20s> (13:43-14:20)
- (2018, 8 agosto b) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=zELem0LJGQk> (16:44-17:00)
- ( 2018, 8 agosto c) Recuperado de:  
<https://www.youtube.com/watch?v=IwBxnQak9iE> (11:29 – 12:18)

Senado Argentina. Sesiones taquigráfica. Disponibles en:

<https://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/tac>

### **5.3.PRENSA**

Agencia EFE: “La desigualdad de género en América Latina es un obstáculo para los derechos reproductivos”. (2018, 17 de octubre) Recuperado el 25 de marzo 2019 de:

<https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/la-desigualdad-de-genero-en-america-latina-es-un-obstaculo-para-los-derechos-reproductivos/50000489-3783930>

AICA. (2019, 25 marzo). “Día del Niño por Nacer: 20 años de la celebración en la Argentina”. *Agencia Informativa Católica Argentina*. Disponible en <http://www.aica.org/38355-dia-del-nino-por-nacer-0-anos-de-la-celebracion.html>

BBC. (2017, 21 agosto). Chile aprueba la despenalización del aborto en tres causales en histórica decisión. *BBC News Mundo*. Recuperado 25 de marzo, 2019 de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41006338>

BBC. (2018, 9 agosto). “Aborto en Argentina: el mapa que muestra dónde la interrupción del embarazo es legal, restringida o prohibida en América Latina”. Recuperado 20 de marzo, 2019 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45132307>

Benavides, S. (2019, 8 junio). “El crudo testimonio de una médica: "A los anti aborto yo les quiero pedir que vengan a ver lo que pasa en la sala de terapia intensiva". Recuperado 8 junio, 2019 de <https://www.infobae.com/ultimas-noticias/>

Carbajal, M. (2018, 25 marzo, a). El aborto sin estigma. *Página12*. Recuperado 4 de abril, 2019 de: <https://www.pagina12.com.ar/103781-el-aborto-sin-estigma>

Carbajal, M. (2018, 25 marzo, b). Las trabas a la ley. *Página12*. Recuperado 4 de abril, 2019 de: <https://www.pagina12.com.ar/103782-las-trabas-a-la-ley>

Camila [cherryssandewine] (2018, agosto, 5) **#YoAborte con pastillas a los 25 años** [Tweet] Recuperado de: <https://twitter.com/cherryssandewine/status/1026335826643443712>

Centenera, M. (2019, 28 mayo). “El aborto se abre paso en la campaña electoral argentina”. *El País*. Recuperado 28 mayo, 2019 de: [https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/1559062371\\_230742.html](https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/1559062371_230742.html)

Centenera, M. (2018, 31 julio). El debate sobre el aborto en Argentina entra en la recta final. *El País*. Recuperado 6 de febrero, 2019 de:

[https://elpais.com/internacional/2018/07/30/argentina/1532964366\\_907805.html](https://elpais.com/internacional/2018/07/30/argentina/1532964366_907805.html)

Cué, C. E. (2018, 23 febrero). “Argentina da el primer paso para legalizar el aborto”. *El País*. Recuperado 26 de marzo, 2019 de:

[https://elpais.com/internacional/2018/02/23/argentina/1519407534\\_994861.html](https://elpais.com/internacional/2018/02/23/argentina/1519407534_994861.html)

GaudiumPress. (2012, 18 septiembre). “38 ciudades argentinas acogen campaña de Acción Católica y se declaran "Ciudad Provida". *GaudiumPress. Un instrumento para la nueva evangelización*. Recuperado 6 de febrero, 2019 de:

<https://es.gaudiumpress.org/content/40376-38-ciudades-argentinas-acogen-campana-de-Accion-Catolica-y-se-declaran--Ciudad-Provida->

“Grupos pro-vida lanzaron una red de acompañamiento para embarazos inesperados”.

(2019, 7 marzo). *La Nación*. Recuperado 25 de marzo, 2019 de:

<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/grupos-pro-vida-lanzaron-red-acompanamiento-embarazos-inesperados-nid2226284>

Infobae. (2018, 27 junio).” El proyecto de legalización del aborto finalmente será debatido en tres comisiones en el Senado”. *Infobae.com*. Recuperado el 4 de abril, 2019 de:

<https://www.infobae.com/politica/2018/06/27/el-debate-sobre-el-aborto-en-el-senado-finalmente-sera-debatido-en-tres-comisiones>

*La Nación*. (2019, 9 febrero a). “Tucumán: una niña de 11 años fue violada, quedó embarazada y analizan si le harán un aborto”. *La Nación*. Recuperado 25 de marzo, 2019 de:

<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tucuman-nina-11-anos-fue-violada-queda-nid2218859>

*La Nación*. (2019, 19 febrero b).” Con un pañuelazo federal buscaron que se instale nuevamente el debate por el aborto”. *La Nación*. Recuperado 25 de marzo, 2019 de:

<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/con-panuelazo-federal-buscaron-se-instale-nuevamente-nid2221685>

La República. (2017, 27 agosto). “Aborto terapéutico en el Perú”. *La República*. Recuperado 6 de febrero, 2019 de: <https://larepublica.pe/sociedad/1076970-aborto-terapeutico-en-el-perU>

Las12. (2018, 24 agosto). “Pasos perdidos. Más ajuste es menos derechos”. *Página12*. Recuperado 6 de febrero, 2019 de: <https://www.pagina12.com.ar/137246-mas-ajuste-es-menos-derechos>

Martínez, M. (2018, 11 agosto) “La ley de plazos minimiza las muertes por abortos clandestinos en Uruguay”. *El País*. Recuperado 6 febrero 2019 de: [https://elpais.com/internacional/2018/08/11/america/1534002595\\_937718.html](https://elpais.com/internacional/2018/08/11/america/1534002595_937718.html)

Pardo, D. (2018, 14 junio a). “Cómo se gestó la histórica y sorpresiva aprobación del aborto legal en la Cámara de Diputados de Argentina (aunque falta el Senado)”. *BBC*. Recuperado 6 de febrero, 2019 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44485642>

Pardo, D. (2018, 25 julio b). Argentina: "Los preservativos no sirven contra el sida", el polémico discurso que calentó el debate sobre el aborto a 2 semanas de votarse en el Senado. Recuperado 6 de febrero, 2019 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44961602>

Perasso, V. (2018, 1 agosto). “Aborto legal en Argentina: estas son las mujeres que tomaron las calles”. *BBC*. Recuperado 6 de febrero, 2019 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45011537>

Politi, D. (2018, 16 abril).” Entre polémicas y controversias, Argentina debate sobre el aborto”. *The New York Times*. Recuperado 6 de febrero, 2019 de: <https://www.nytimes.com/es/2018/04/16/aborto-argentina-macri/>

Tarricone, M. (2018, 9 agosto). ¿Qué es el fallo “F.A.L.” y qué obligaciones estableció la Corte? *Chequeado*. Recuperado El 6 de febrero 2019 de: <https://chequeado.com/el-explicador/que-es-el-fallo-f-a-l-y-que-obligaciones-establecio-la-corte/>

Titto, J. (2017, 22 febrero). “¿Una nueva ola del feminismo? “*Notas Periodismo Popular*. Disponible en: <https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/02/22/nueva-ola-feminismo/>

## 6. ANEXOS

### 6.1. PROYECTO LEY IVE 2019<sup>11</sup>

#### PROYECTO DE LEY INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

##### TÍTULO I

##### Capítulo I

##### Interrupción voluntaria del embarazo

**Artículo 1: *Interrupción voluntaria del embarazo.*** En ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional.

**Artículo 2: *Derechos protegidos.*** Esta ley garantiza a toda mujer o persona gestante, sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia/ciudadanía, todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico cultural, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y a una vida libre de violencias.

**Artículo 3: *Definiciones.*** A los efectos de la presente ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son considerados términos equivalentes. El término salud integral debe interpretarse sin excepción conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS): La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Las expresiones “mujer u otras identidades con capacidad de gestar” y “mujer o persona gestante” son equivalentes.

**Artículo 4: *Causales.*** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero y más allá del plazo allí establecido, toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

- a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente.
- b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.

**Artículo 5: *Plazos y condiciones.***

- a) Toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que determinan la presente ley, la ley N° 26.529 y concordantes.
- b) Toda mujer o persona gestante tiene derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo sea realizada o supervisada por un/a profesional o personal de salud.
- c) Si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa.
- d) Debe garantizarse a la mujer o a la persona gestante el cumplimiento de las recomendaciones

---

<sup>11</sup> Disponible en la plataforma de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: <http://www.abortolegal.com.ar/>



de la OMS para acceder a una práctica segura y una atención que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada.

**Artículo 6: Acceso a la información.** En la primera consulta el/la profesional o personal de salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica y los riesgos de su postergación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 5 de la presente ley.

La información provista debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona. El sistema de salud debe garantizar un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona que requiere la práctica. En el caso de las personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades. En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de salud ni de terceros/as.

**Artículo 7: Asesorías:** Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que así lo requieran:

- a) Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios, siguiendo los criterios del artículo anterior;
- b) Atención de salud integral previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo, que provea un espacio de escucha y contención integral;
- c) Acompañamiento en el cuidado de la salud e información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro la reemplace. La atención y acompañamiento previstos en este artículo deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y confidencialidad, desde una perspectiva de derechos. Estos servicios en ningún caso podrán ser obligatorios ni condición para la realización de la práctica.

**Artículo 8: Consentimiento Informado.** Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, se requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529 y concordantes y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

**Artículo 9: Niñez y adolescencia:**

- a) Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de trece (13) años de edad, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En ausencia o falta de ellos/as, se solicitará la asistencia de las personas indicadas en el artículo 4 del decreto reglamentario 1282/2003 de la Ley 25.673, en el artículo 7 del decreto reglamentario 415/2006 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este supuesto, no se deberá requerir autorización judicial alguna.
- b) Si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona adolescente de entre trece (13) y dieciséis (16) años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. En aquellos casos en que esté en riesgo grave la salud o la vida, por condición preexistente, circunstancia ésta que deberá constar en la historia clínica fundadamente, la persona adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as. En ausencia o falta de ellos/as, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso a) del presente artículo. En el caso de existir intereses contrapuestos entre la persona adolescente y el/la adulto/a responsable, será el/la profesional o personal de salud interviniente que deberá decidir de acuerdo a lo

preceptuado en el art. 26 del Código Civil y Comercial de la Nación.

c) La persona mayor de 16 años tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley.

En todos los supuestos contemplados en los artículos que anteceden serán de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace al interés superior y el derecho a ser oído/a de todo/a niño, niña y adolescente y que su opinión sea tenida en cuenta.

#### **Artículo 10: *Personas con discapacidad y personas con capacidad restringida.***

Toda mujer o persona gestante debe brindar en forma personal su consentimiento libre e informado para interrumpir su embarazo. Ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio de este derecho por terceras personas, independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica.

Si se tratare de una persona con capacidad restringida judicialmente y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado requiriendo, si lo deseara, la asistencia del sistema de apoyos previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de éste, la de un allegado en los términos del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

### **Capítulo II**

#### **Cobertura**

##### **Artículo 11: *Cobertura.***

El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la Ley 23.660 y Ley 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por la Ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la Ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en todas las formas que la OMS recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el PMO con cobertura total, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

### **Capítulo III**

#### **Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral**

##### **Artículo 12: *Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral.***

El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o

social, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.

Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes 25.673, 26.061, 26.075, 26.150, 26.206, 26.485, 26.743 y 27.499, además de las leyes ya citadas en la presente ley. Deberán además capacitar en servicio sobre perspectiva de género y diversidad sexual a todos/as los/as docentes y a los/as profesionales y otros/as trabajadores/as de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, así como a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as que actúen en dichos procesos.

## **TÍTULO II**

### **Modificación del Código Penal**

**Artículo 13:** Sustitúyase el artículo 85 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 85: Quien causare un aborto será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los/las profesionales o personal de salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

**Artículo 14:** Incorpórese como artículo 85 bis del Código Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 85 bis: Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años de prisión si, como resultado de la conducta descrita en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. Si como consecuencia de esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena se elevará a cinco (5) años de prisión.

**Artículo 15:** Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 86: No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.

Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante:

**a)** Si el embarazo fuera producto de una violación. Se debe garantizar la práctica con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional o personal de salud interviniente;

**b)** Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.

**Artículo 16:** Sustitúyese el artículo 87 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 87: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la mujer o persona gestante fuere notorio o le constare.

**Artículo 17:** Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 88: La mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada.

### **TÍTULO III**

#### **Disposiciones finales**

**Artículo 18: *Autoridad de aplicación.*** La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

**Artículo 19: *Orden público.*** Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.

**Artículo 20:** Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

## 6.2. TRATADO CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979

**Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1)**

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer,

Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto,

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia,

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:

## Parte I

### Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

### Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
- d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
- e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
- f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
- g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

### Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

### Artículo 4

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

### Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

- a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
- b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

### Artículo 6

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

## Parte II

### Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

- a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
- b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
- c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

### Artículo 8

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

### Artículo 9

- 1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
- 2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

## Parte III

### Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

- a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
- b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;
- c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;



- d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;
- e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
- f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
- g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;
- h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

#### Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:

- a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
- b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
- c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
- d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
- e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
- f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

- a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;
- b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;
- c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
- d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

#### Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

#### Artículo 13

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

- a) El derecho a prestaciones familiares;
- b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;
- c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

#### Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

- a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
- b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
- c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
- d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;
- e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

#### Parte IV

#### Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

#### Artículo 16

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

- a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
- b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
- c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
- d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
- e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
- f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
- g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
- h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

## Parte V

### Artículo 17

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de un lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité.

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.

#### Artículo 18

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate;

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

#### Artículo 19

1. El Comité aprobará su propio reglamento.

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

#### Artículo 20

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

#### Artículo 21

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.

#### Artículo 22

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

#### Parte VI

#### Artículo 23

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:

- a) La legislación de un Estado Parte; o
- b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

#### Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención.

#### Artículo 25

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

#### Artículo 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

#### Artículo 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

#### Artículo 28

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

## Artículo 29

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

## Artículo 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.

**6.3. CÓDIGO PENAL DE ARGENTINA. ARTÍCULOS QUE TRATAN EL ABORTO**  
(Código Penal de la Nación Argentina, 1984 (Libro II de los Delitos)-Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado)

**ARTICULO 85.** - El que causare un aborto será reprimido:

1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer.

El máximo de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

**ARTICULO 86.** - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

**ARTICULO 87.** - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

**ARTICULO 88.** - Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.